



Politólogo coordinador del capítulo “Armonía con la naturaleza” del programa Estado de la Nación.

¿Renovar compromisos... o asumirlos? Tres desafíos en torno al Principio X de la Cumbre de Río y el diálogo político ambiental

..... || **Leonardo Merino**



El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. (...)

Participación de la sociedad en la conservación del medio ambiente nacional, así como acceso apropiado a la información que tengan las autoridades públicas, resaltando su participación en los procesos de toma de decisiones

-Principio X, Cumbre de Río 1992. Fragmento-

El desafío de vincular el desarrollo con una práctica productiva sostenible, y bajo una conducción participativa e informada de la sociedad, no se ha consolidado significativamente desde que la Cumbre de Río planteara en 1992, en su Principio X, que la mejor forma de manejar los temas ambientales era con el concurso de la población. Tanto en el mundo, como en la región centroamericana y en Costa Rica, de maneras disímiles y con ritmos y retos particulares en cada caso, los procesos económicos



Volver al índice

y políticos, permeados por un discurso altamente presente sobre el desarrollo sostenible, no han confrontado en la práctica esos retos, con un cambio sólido para lograr avanzar sin comprometer el equilibrio ecológico y la disponibilidad de recursos naturales, para las generaciones futuras. Si el planteamiento, a veinte años de Río, es “renovar compromisos políticos con el desarrollo sostenible y evaluar logros”, desde nuestro país se pueden hacer al menos tres señalamientos que muestran que, aún con las advertencias de aquel encuentro, el crecimiento está aún sustentado en un alto costo ambiental, y sin pasar por un diálogo político transparente, más allá de las palabras.

En primer lugar, la información parece establecer con claridad que ninguna región del mundo ha logrado resolver, de manera sustantiva, la compleja relación entre Ambiente y Desarrollo. Los logros (diferenciados) en desarrollo humano se han sustentado en el uso insostenible de los territorios y los recursos naturales, de los países más desarrollados. Y al contrario, en algunas regiones, las más pobres, son aún tan escasos los avances hacia la equidad y desarrollo social que esta preocupación parece secundaria.

Al analizar la huella ecológica mundial, es evidente que la brecha entre el uso y la capacidad del territorio es creciente conforme mayor es el índice de desarrollo humano de las regiones. La relación es directa, como se puede observar en el gráfico 1. Bajas deudas ecológicas no suelen fundarse en sociedades más sostenibles,



Ricardo Garibay.
Montaña de
Guerrero,
México

sino en aquellas cuyo uso de recursos es evidentemente menor, porque la satisfacción de las necesidades humanas básicas también lo es. Si no se alimenta adecuada y extendidamente a la población, ni se universaliza su acceso al agua potable o a la energía, la presión sobre los recursos es menor, con el precio de una población empobrecida y excluida. En cambio, el alto nivel de vida de las sociedades más ricas se mantiene con el precio de una alta huella ecológica y comprometiendo la sostenibilidad global.

Según el recientemente publicado Informe *Estado de la Región en desarrollo humano sostenible 2011*, el último dato centroamericano (2007, publicado en 2010), la región tiene una deuda en su huella ecológica. Este índice compara la capacidad disponible de los países para distintos tipos de uso del suelo, y lo com-

para con los usos reales que realiza dicha nación en un año determinado. Según esto, “con el ritmo prevaleciente de uso de los recursos naturales, cada habitante del Istmo requiere un 10% más del territorio disponible para satisfacer su consumo. En 2003 la brecha era positiva (se requería menos del territorio disponible, 84%). El notable cambio se explica, principalmente, por la porción que corresponde a la huella de carbono (un 30,5% de la huella total), impulsada por las emisiones contaminantes. El índice varía entre países: Panamá y Nicaragua mantienen aún una brecha positiva, mientras el déficit más grave lo exhibe El Salvador, seguido por Costa Rica y Guatemala” (Programa Estado de la Nación, 2011).

Esta brecha es superior al promedio de América Latina y el Caribe, que en conjunto mantienen una biocapacidad, el doble mayor a su huella ecológica. También supera el promedio africano, cuya presión sobre los recursos es menor a la de un planeta completo. Pero es una brecha pequeña comparada con el promedio mundial (se requiere un planeta y medio con los patrones actuales), y mucho menor que la de zonas como Estados Unidos (que necesita más del doble de su territorio, un 110%), Asia (125% más) o Europa (60% más) (Programa Estado de la Nación, 2011). En suma, el avance hacia un desarrollo no sustentado en un alto costo ecológico es un compromiso que, en el nivel global, no ha pasado del papel en ninguna de las regiones.

Una segunda evidencia de la falta de concreción de los compromisos políticos es la falta de diálogo ambiental en Costa Rica. Ante la reiterada y dura evidencia que sobre el tema se muestra en todos los espacios recientemente, el país urge de un diálogo político serio, informado y abierto sobre su posición en materia de protección de la naturaleza y sostenibilidad de su modelo de desarrollo, tal como señala el desafío planteado por el *Principio X* de Río.

Somos una sociedad que tiende a “criticar la crítica”. Pero aunque seamos reconocidos en el mundo y promovamos nuestra imagen ecológica, hacia adentro debe imperar la autocrítica; no para debilitarnos, sino para reencontrarnos con un camino que no comprometa nuestra supervivencia presente y futura. Y en desempeño ambiental no estamos haciendo las cosas ni bien, ni en serio, ni como una sociedad integrada.

¿Qué sabemos sobre el desempeño reciente de Costa Rica? Hace más de una década el ambiente no es prioridad política, y no genera acciones consensuadas sino conflictos; además, el amplio marco normativo no se transforma en control efectivo, como ha planteado entre otros, el Informe *Estado de la Nación*. Ante esto no se usa la información que existe, ni se monitorea con responsabilidad: ya llevamos cuatro gobiernos que incumplen el mandato de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de crear indicadores ambientales y publicar anualmente un informe oficial.



Alfredo Huerta.
Talamanca, Limón,
Costa Rica

Sabemos también que tenemos un patrimonio natural, rico y diverso, protegido con mucho esfuerzo y sabiduría en más de un cuarto del territorio. Y que este no es una carga sobre nuestro desarrollo, sino un pilar de nuestra economía e imagen: generó 700 mil millones de colones en un año (2009, según CINPE-UNA), más que ningún producto de exportación (2,5 veces lo que generó la piña). Pero también conocemos que los desafíos ambientales superan las fronteras de las áreas protegidas, y que nuestro comportamiento (en zonas urbanas, agrícolas, costeras, industriales...), impacta el equilibrio y calidad de la vida y la naturaleza. Esto nos lleva a la triste paradoja de que un país que tiene un cuarto de su territorio protegido y que ha recuperado cobertura forestal, tenga una huella ecológica negativa por cómo se comporta en el resto.

Ya estamos enterados y enteradas de nuestros patrones insostenibles de uso de los recursos naturales, en una huella

ecológica creciente y negativa (cada costarricense requiere 12% más del territorio disponible, según el Estado de la Nación). Esta deuda tiene nombres y apellidos: una huella de carbono que crece (25% en menos de una década) por el alto uso de hidrocarburos –principalmente en transporte–, y un nulo ordenamiento territorial.

Sabemos que viene el cambio climático, y que nos agarra en la zona más vulnerable del planeta. Aun así, cumplimos con traspies la tarea de cuidar el bosque; mal la de bajar nuestras propias emisiones; y muy mal la de reducir la construcción social de riesgos, que cobra recurrentemente vidas y mina los medios de vida, en especial en la población más vulnerable. Es decir, no cumplimos la tarea de prepararnos para el golpe.

También estamos claros de que los actores económicos más dinámicos y fuertes no quieren ser regulados y han actuado sobre la marcha y sin interés; que la competencia por la tierra y los recursos es

creciente, y las autoridades permisivas en ese conflicto (incluso debilitando la institucionalidad cuando esta actúa). La gente que pelea —que es mucha— lo tiene que hacer por vías más judiciales que políticas, por la falta de espacio real de diálogo y participación en las decisiones que tienen implicaciones sobre el ambiente.

Lo que no sabemos es por qué, ante todo lo anterior, no hacemos en este campo el esfuerzo nacional de crear consensos y concretarlos. Para identificar las tareas de una ruta crítica (ojalá con el marco de esta “renovación de compromisos” que puede permitir la cumbre de Río+20) el reto inmediato es detener la indiferencia de las autoridades centrales. Y así, de manera informada, participativa y transparente, generar un diálogo de frente entre todos los actores, que permita definir el papel real de la sostenibilidad en nuestra visión del desarrollo, y la equidad social en la distribución de los beneficios y las responsabilidades ambientales, para nosotros/as y nuestras futuras generaciones.

Por último, un tema de enormes repercusiones y que urge la atención real de las autoridades políticas y de la sociedad en su conjunto es el del cambio climático, y las acciones para enfrentarlo. También el *Estado de la Región 2011* analizó a fondo el tema, planteando que a Centroamérica se le nota ante este fenómeno la falta de preparación y la alta vulnerabilidad con que ha enfrentado las recurrentes amenazas que ya le golpean. El tema amplifica problemas históricos: pobreza y vulnerabilidad social, desorden territorial

y sin gestión de riesgos, deterioro ambiental y dependencia energética. Todo en un marco que reproduce las profundas desigualdades entre las regiones ricas y pobres del mundo, y entre ganadores y perdedores del desarrollo.

Como plantea el Informe, Centroamérica paga en esto una factura ajena: se trata de la región del mundo con la mayor vulnerabilidad probable a recibir los impactos del cambio climático, a pesar de que es responsable de menos del 0,5% de las emisiones globales que lo causan. Y en materia de desastres, la región ya vive, como se acaba de comprobar en el mes de octubre, un fuerte costo de su vulnerabilidad.

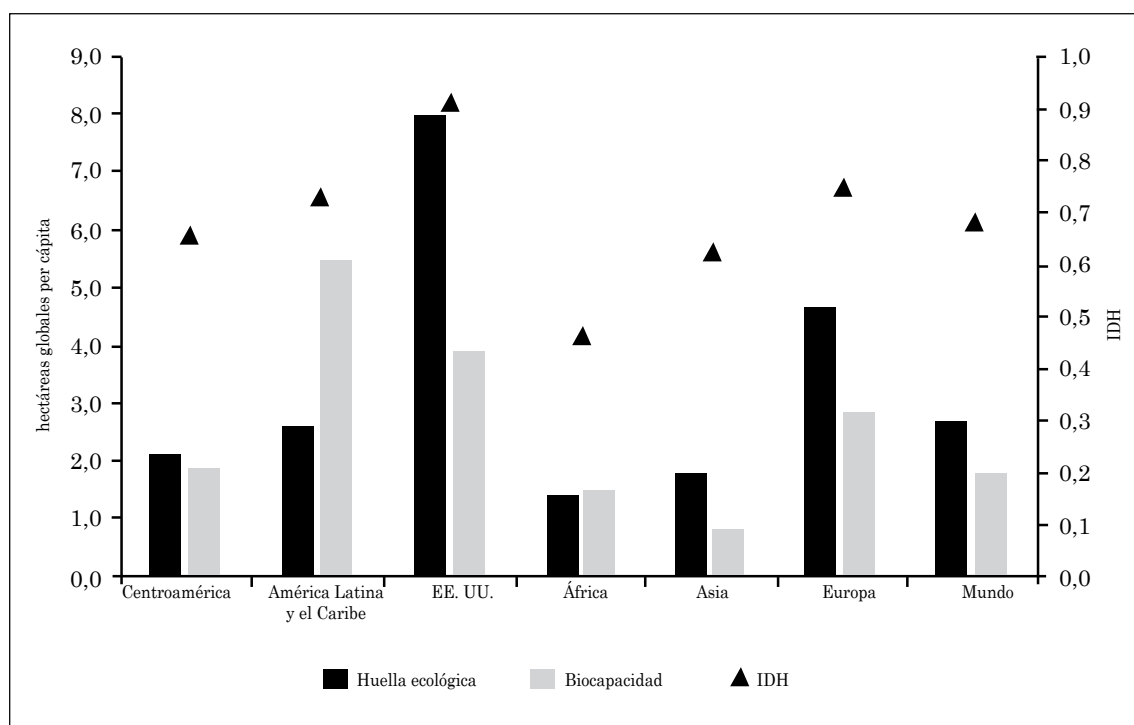
Pero ante lo anterior, nuevamente el compromiso político es limitado y, sobre todo, desviado de lo central. En Centroamérica ha sido abundante la promulgación de políticas y estrategias. Sin embargo, al estudiar a fondo 65 de ellas, solo siete identifican los responsables y los recursos para cumplirlas. Y además, se han enfocado mayoritariamente hacia la mitigación (reducción y fijación de emisiones) (Merino, 2010). Este énfasis ha sido marcado por la existencia de un “mercado internacional de culpas”: grandes contaminadores que pagan a regiones pobres que “compensen” su crecimiento. Pero esto nos aleja de asumir lo que urge para el Istmo: adaptación, que pasa por reducir el riesgo de la población más vulnerable como la principal tarea, asegurando su seguridad, su alimentación y el equilibrio natural y climático que garantice sus medios de vida.

Los tres elementos señalados nos hablan de la necesidad no solo de reafirmar compromisos, sino de concretarlos en mejores modelos de desarrollo y nuevos canales de diálogo político y participación ambiental, para la definición de prioridades y el manejo de los recursos naturales. El espacio de reevaluación que permite

la cumbre de Río+20 es una oportunidad, que requiere ser asumida con autocrítica y con la definición de obligaciones y responsabilidades claras en los países y a nivel global, de forma que los retos del desarrollo sostenible se enfrenten con equidad en la distribución de costos y beneficios.

Gráfico 1

Huella Ecológica e Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Centroamérica y otras regiones del mundo. 2007



Nota: los datos de huella ecológica y biocapacidad son de 2007, publicados en 2010.

Fuente: elaboración propia con información de la Global Footprint Network y datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del PNUD.

Referencias bibliográficas

Merino, L. 2010. *Políticas y estrategias nacionales y regionales de adaptación y mitigación frente al cambio climático*. Ponencia preparada para el Cuarto Informe

Estado de la Región. San José, Programa Estado de la Nación.

Programa Estado de la Nación. 2011. Cuarto Informe Estado de la Región. San José, Programa Estado de la Nación.